

MINUTA LEGISLATIVA

En 1991, la ley Nº 19.030 creó el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), con el objeto de atenuar las variaciones de los precios de venta internos de los combustibles derivados del petróleo, que se originan producto de las fluctuaciones de sus cotizaciones internacionales.

Dicho instrumento se ha aplicado a fin de aliviar el alza de los precios de la gasolina automotriz, el kerosene doméstico, petróleo diésel, el gas licuado, nafta y petróleos combustibles. Sin embargo, luego de la modificación introducida en el año 2011, por la ley Nº 20.493, el único combustible afecto a este fondo es el kerosene doméstico o también llamado parafina.

En la práctica, este Fondo opera mediante la entrega de un crédito, o cobro de un impuesto variable, a través de los cuales se busca estabilizar el precio del combustible en el mercado interno, considerando el precio observado en los mercados internacionales y una banda de referencia que se construye sobre la base de precios de referencia que considera las expectativas del precio de largo plazo y su evolución histórica.

Así, si el precio en cuestión se ubica por debajo de la banda referencial, se impone un impuesto de la magnitud entre la diferencia del precio inferior de referencia y el precio de paridad. En ocasiones cuando ocurre de manera contraria, se concede un crédito fiscal equivalente al monto de la diferencia entre el precio de paridad y el precio superior de referencia.

Así también, el crédito puede ser reducido mediante la aplicación de un factor de ajuste que busca asegurar la sostenibilidad de este Fondo. Este factor considera: El tamaño del Fondo, la proyección de consumo prevista para las próximas doce semanas, y la magnitud del crédito inicial. Por tanto, cuando disminuyen los recursos disponibles, con ello también lo hace el monto disponible para subsidiar.

En lo observado las últimas cuatro semanas, el crédito ha permitido la reducción promedio de un 32% del precio, explicada principalmente por la magnitud del crédito inicialmente calculado y a la reducción del tamaño del Fondo.

Este monto de crédito inicial está directamente relacionado con los precios internacionales observados para el kerosene y el petróleo, los cuales han tenido un alza sistemática durante el último año. En los últimos doce meses, el kerosene ha anotado un alza de un 70%, explicado principalmente por los efectos de la invasión Rusia a Ucrania, y la incapacidad productiva para hacer frente a la demanda mundial de este recurso. Así, se pronostica poco probable la disminución de los precios de estos combustibles en el corto plazo.

Por lo anterior, y considerando que la presión sobre el FEPP continúe aumentando, y que los créditos que este pueda conceder, por consiguiente disminuyan, provocando así un alza en los precios de la parafina, impactando a miles de hogares

durante los meses en los que más se requiere de este producto, es que el Ejecutivo ha decidido enviar un proyecto al Congreso (boletín N° 14.945-05), en que busca someter a discusión la modificación de la ley N° 19.030, que crea este Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, a fin de poder incrementar sus recursos y atender a la situación descrita anteriormente.

El Gobierno asegura que la inyección de nuevos recursos a este Fondo (\$40 millones de dólares), permitiría reducir significativamente el precio por litro de parafina, permitiendo hacer frente al consumo de miles de familias del país que requieren de este producto para calefaccionar sus viviendas durante los meses de invierno.

MINUTA LEGISLATIVA

Nuestro ordenamiento jurídico recoge en la Ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pensiones alimenticias y otras normativas legales complementarias, el derecho de los hijos a recibir alimentos por parte de sus progenitores. De igual forma, este derecho se encuentra consagrado en diversas instancias legales de carácter internacional, en las cuales nuestro país se ha hecho parte suscribiendo a dichas instancias: Entre ellos se destacan, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual dispone en su artículo número 27 que “los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, agregando a su vez que “a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”.

Dicho acuerdo internacional también consagra que los Estados suscritos a dicha Convención, deberán adoptar todas las medidas apropiadas que permitan asegurar que el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres se produzca de forma efectiva.

No obstante, en nuestro país, las cifras en la materia son desalentadoras: El año 2020 concluyó con un 84% de las pensiones alimenticias impagas, lo que a su vez se traduce en una deuda que asciende a los \$180 millones, afectando a más de 72 mil niñas y niños que se encuentran en esta condición.

En los últimos años, se han hechos los esfuerzos legislativos a fin de avanzar en la modificación de los cuerpos legales pertinentes, buscando incorporar nuevos mecanismos de apremio que permitan disponer de herramientas a fin de solicitar por parte de los afectados cuando se registren este tipo de incumplimientos en los pagos de las pensiones alimenticias, con medidas que van desde arresto nocturno hasta por quince días, la suspensión de la licencia de conducir hasta por seis meses, la retención de las devoluciones anuales de impuestos, el arraigo nacional, el embargo, y la liquidación de los bienes. Sin embargo, si bien se han emitido órdenes de arresto contra cerca del 88% de quienes actualmente figuran como deudores de pensiones alimenticias, tan sólo el 0,16% de estos se encuentra cumpliendo con la medida dispuesta de arresto nocturno contemplada para tales efectos en la actual legislación.

El esfuerzo legislativo más reciente, dice relación con la Ley Nº 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la cual fue publicada en noviembre del recién pasado año 2021, y que tras la modificación de diversos cuerpos legales, perfecciona el sistema de pago de pensiones, permitiendo adoptar medidas que promuevan dicho pago.

No obstante, resulta fundamental seguir buscando opciones que permitan de manera sustancial, incrementar el rango de pago de las pensiones alimenticias: Si bien la ley anteriormente señalada, incorpora medidas de apremio como rechazar la solicitud de pasaporte como manera de presionar al pago de pensiones, se considera una medida positiva pero insuficiente.

En tal sentido es que los Senadores Ossandón, Aravena, Gatica, Kusanovic y Pugh, han presentado una moción parlamentaria (boletín Nº 14.953-08) que busca modificar la ley Nº 21.389, con el objeto de establecer, mediante un artículo único, una nueva medida de apremio para el pago de pensiones de alimentos para niños, niñas y adolescentes, buscando denegar la tramitación de la cédula nacional de identidad para las situaciones en que corresponda según la ley y registro de deudores de pensiones alimenticias.

